

## Capítulo Cuarto

### Responsabilidad por el Daño Ambiental

#### 1. Marco Normativo

Uno de los cuatro pilares sobre los que descansa la LBGMA es el de la responsabilidad por el daño ambiental. Si bien es cierto, no se trata de la primera regulación en el Derecho chileno sobre la responsabilidad procedente en materia de daños al medio ambiente, sí constituye una innovación tanto respecto del ámbito de aplicación, como en las consecuencias que acarrea la responsabilidad por el daño ambiental<sup>314</sup>.

El Título I sobre "*Disposiciones Generales*" de la LBGMA en su artículo 3 dispone que: "*Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuera posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley*".

Más adelante, el Título III "*De la Responsabilidad por el Daño Ambiental*", en su párrafo

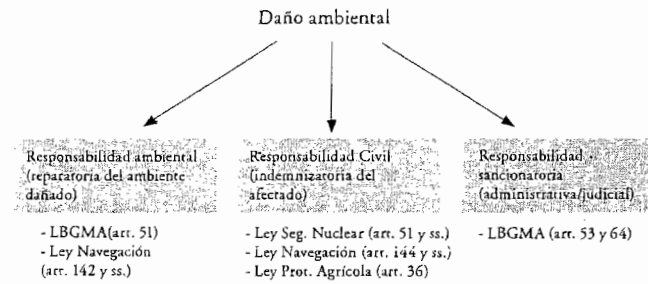
<sup>314</sup> Sobre este tema ya se ha hecho referencia por el mismo autor en: *Sistemas Sancionadores de protección ambiental*, op. cit. Capítulo XV *in totum*; Algunos aspectos de la protección jurídico ambiental de los recursos hídricos, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antofagasta (Chile)*, año 1998, pp. 97-140; Roles del Consejo de Defensa del Estado en la protección del medio ambiente: acción ambiental y recurso de protección en materia ambiental. RDUCV, N° XX, pp. 243-270; La responsabilidad extracontractual de la Administración del Estado por falta de servicio y por el daño ambiental, RDUCV N° XXIII pp. 244-256. En consecuencia, algunas de las conclusiones que aquí se exponen, ya fueron manifestadas en dichos artículos. No obstante lo cual, esta parte constituye una exposición completa y reelaborada del tema.

1º sobre "Daño Ambiental", comienza declarando en el artículo 51 inc. 1º, a modo de principio general, que: *"Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental, responderá del mismo en conformidad a la presente ley"*.

A través de las dos disposiciones citadas se materializa el principio de responsabilidad en materia ambiental: *producido un daño ambiental surge la obligación de responder por el mismo de acuerdo con las disposiciones de la ley*. Resulta de importancia destacar este extremo porque lo que se regula en el Título III de la LBGMA, que comienza con el artículo 51, es precisamente el sistema general de responsabilidad por el daño ambiental. Es decir, en él se contempla todo un sistema normativo, específicamente dirigido a regular la forma en que se responderá por los daños causados al medio ambiente. A partir de la entrada en vigor de la LBGMA la responsabilidad del causante de daños ambientales podrá ser perseguida ante los tribunales, a través de una acción general y especialmente diseñada a ese efecto.

No obstante lo anterior, la LBGMA reconoce que existen otras acciones ambientales de carácter especial, las que deja subsistentes. En efecto, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales tendrán preeminencia sobre la acción genérica contenida en la LBGMA. Así lo dispone el artículo 51 inc. 2º: *"No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley"*. Sin embargo, la preeminencia es sólo en cuanto se trate de normas especiales en materia de responsabilidad por daño ambiental, y no respecto de otras normas sobre responsabilidad por daños en general.

Entre los casos de responsabilidad ambiental especial se señalan como ejemplos clásicos la responsabilidad por la contaminación acuática, contenida en el artículo 144 del DL N° 2.222 de 1978, ley de navegación; la responsabilidad objetiva por el daño nuclear, artículo 49 de la ley N° 18.302 de seguridad nuclear. A los que se agrega el caso del DL N° 3.557 de 1981, ley de protección agrícola, el que dispone la responsabilidad objetiva frente a los daños causados a terceros por el uso de plaguicidas. Sin embargo, en todos estos casos resulta cuestionable que estos casos correspondan a una responsabilidad ambiental especial, toda vez que el daño que se indemniza corresponde a los daños que sufrieron terceros (en su persona o propiedad) y no el daño en el medio ambiente a cuya reparación es a lo que estrictamente tiende la LBGMA. En consecuencia, más que tratarse de una responsabilidad ambiental especial, en estricto rigor, se trataría de una responsabilidad civil extracontractual nacida a partir de un daño ambiental. Esta conclusión trae la siguiente consecuencia, producido un hecho que ocasiona daño ambiental, las posibles acciones para perseguir las consiguientes responsabilidades pueden ser variadas, como muestra el Cuadro siguiente:



## 2. Responsabilidad Ambiental en el Derecho Comparado

En el Derecho ambiental comparado es posible distinguir al menos tres fórmulas legislativas a través de las que se ha asumido el daño y consecuente responsabilidad ambiental, a saber:

### 2.1 Aplicación de normas de Derecho común

El primer grupo está integrado por aquellos ordenamientos que no han establecido normas especiales para regular el daño ambiental, con lo que las situaciones de responsabilidad que se plantean se resuelven de acuerdo con las normas comunes del Derecho civil. Ejemplos de esta fórmula se encuentran en los siguientes ordenamientos:

#### 2.1.1 Sistema español (I)

Bajo esta fórmula se alinea el sistema de responsabilidad ambiental adoptado en el Derecho español. El artículo 45.3 de la Constitución española, luego de disponer que las violaciones al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado pueden ser sancionadas penal o administrativamente, establece la *"obligación de reparar el daño causado"*. Esta disposición admite una concepción amplia de lo que puede entenderse por daño, sin embargo no ha encontrado una respuesta legislativa que resuelva de forma general el problema del daño a bienes con naturaleza únicamente ambiental. La regla general indica que frente a los casos de daño ambiental, la responsabilidad se determina de acuerdo a las normas civiles, cuyo principio rector se consagra en el artículo 1902 del Código Civil español, el cual dispone que *"El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado"*. El problema radica en qué el daño que genera la

responsabilidad es el inferido "a otro", es decir, en su persona y bienes patrimoniales, dentro de los que no es posible incorporar de modo directo los bienes ambientales. Sin embargo, existen excepciones a esta regla general, que se incluirán más adelante.

### 2.1.2 Sistema mexicano

La solución del legislador mexicano también es comparable a la del español, en cuanto la regla general que se contempla es la del artículo 1910 Código Civil mexicano que dispone lo que sigue: *"El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexplicable de la víctima"*. La fórmula mexicana es similar a la del legislador español, en cuanto el concepto de daño sobre el que se articula el sistema de responsabilidad es aquél que se cause "a otro". La única especificidad que puede encontrarse en materia ambiental se establece en relación a la prueba, ya que la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de 1988, dispone en su artículo 194 que: *"Cuando por infracción a las disposiciones de esta ley se hubieren ocasionado daños o perjuicios, el o los interesados podrán solicitar a la Secretaría, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio"*. Si bien esta norma tiene por objeto facilitar la prueba del daño ambiental<sup>315</sup>, se encuentra con el grave inconveniente de que no existe norma que regule una responsabilidad que vaya más allá de los bienes estrictamente individuales (persona y propiedad).

## 2.2 Aplicación de soluciones comunes por normas especiales

Dentro de este grupo se incluyen aquellos ordenamientos que, no obstante haber establecido disposiciones específicamente referidas al daño ambiental, recogen una concepción civilista o común de lo que se debe entender por tal. En virtud de esta fórmula, la solución legislativa ha ido por el lado de entender que la responsabilidad por daño ambiental procederá cuando el menoscabo o perjuicio se hubiere producido en bienes que tradicionalmente han sido incorporados en el concepto de daños, como la persona o el patrimonio, es decir, bienes individuales, quedando incluidos los daños estrictamente ambientales sólo de forma indirecta. Por lo general la ventaja que ofrece esta vía radica en el traslado de la carga de la prueba. Ejemplo de esta forma de regulación se encuentra en el siguiente ordenamiento:

<sup>315</sup> Cfr. Raúl Brañes, Manual de Derecho Ambiental Mexicano, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pp. 226-227.

### 2.2.1 Sistema alemán

Tal es la fórmula asumida por la ley alemana de responsabilidad medioambiental (*Umwelthaftungsgesetz*) de 10 de diciembre de 1990 en cuyo párrafo § 1 se dispone que: *"Si por impacto ambiental, procedente de una de las instalaciones mencionadas en el Anexo 1 se produjere la muerte de alguien, lesiones en el cuerpo o la salud, o daños en alguna cosa, el titular de la instalación estará obligado, frente a los perjudicados, a reparar los daños originados"*. Como puede apreciarse, a pesar de la denominación de la ley, la naturaleza del daño que hace nacer la responsabilidad en la ley alemana no es un daño en el medio ambiente como tal, sino sobre la persona o su patrimonio, tal es el daño que se debe indemnizar y no el propiamente ambiental. La particularidad está en que el hecho dañoso consiste en un impacto ambiental, pero el perjuicio o menoscabo que se debe reparar no difiere del que debería repararse bajo las normas del Derecho civil alemán, ya que lo que se repara es el daño a las personas o a las cosas, producido por un impacto ambiental<sup>316</sup>.

## 2.3 Aplicación de un concepto específico de daño ambiental

Se trata de aquellos sistemas de responsabilidad en que el legislador recoge una formulación específica de daño ambiental, distinta y separada de los perjuicios a la persona o al patrimonio.

### 2.3.1 Sistema italiano

Esta es la fórmula empleada por la ley italiana de 8 de julio de 1986, N° 394, sobre la Institución del Ministerio del Ambiente y normas en materia de daño ambiental, en cuyo artículo 18.1 dispone que: *"Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni"*

<sup>316</sup> Ana Cañizares Laso y José Miguel Rodríguez Tapia, La nueva regulación alemana en materia de responsabilidad por daños causados al medio ambiente, Anuario de Derecho Civil, Tomo XLVII Fascículo I, enero-marzo 1994 p. 210, comentando los rasgos distintivos de esta ley afirman que: *"El objeto de protección directo de la ley es especialmente el individuo. El medio ambiente se protege sólo de forma mediata, a través de aquella protección que la responsabilidad liga a un impacto medioambiental"*. En el mismo sentido Antonio Cabanillas Sánchez, La reparación de los daños al medio ambiente, Ed. Aranzadi, Pamplona 1996, p. 129: *"La finalidad de la ley es posibilitar una adecuada indemnización en caso de lesión de bienes jurídicos individuales"*.

En todo caso, se debe destacar otros aspectos de esta ley, tales como la presunción de causalidad contenida en el § 6.1 (*Ursachenvermutung*), en virtud de la cual se invierte la carga de la prueba de este elemento, recayendo sobre el demandado. Para una visión panorámica de la ley alemana de responsabilidad medioambiental: William C. Hoffman, Germany's New Environmental Liability Act: strict liability for facilities causing pollution, Netherlands International Law Review, XXXVIII The Hague 1991 p. 27 y ss.

*di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato*". La ley italiana establece una responsabilidad por alteración, deterioro o destrucción en todo o en parte del medio ambiente, por la cual se debe indemnizar al Estado (Ministerio del Ambiente), siempre que exista dolo o culpa. Es decir, aquí el hecho que genera la responsabilidad es el daño estrictamente ambiental, y ese es el que genera la responsabilidad, que en este caso se traduce en una indemnización en favor del Estado. Dicha indemnización, en principio, quedará afectada a una finalidad de protección ambiental.

### 2.3.2 Sistema español (II)

El legislador español también ha recogido en normas especiales una referencia a daños específicamente ambientales, por tanto desvinculados de los daños que sufren los sujetos de derecho o sus patrimonios, y con la consecuente reparación sobre aquella clase de bienes. La ley 4/1989 de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres dispone en su artículo 37.2 lo que sigue: *"Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la restauración del medio natural al ser y estado previos al hecho de producirse la agresión. Asimismo, la Administración competente podrá subsidiariamente proceder a costa del obligado. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente"*. La solución que se adopta por la ley española de espacios naturales (4/1989) se basa en un concepto de daño estrictamente ambiental, y como correlato, la reparación también discurre sobre dicha idea<sup>317</sup>. Sólo dos problemas se pueden observar: por un lado se trata de una ley especial, con lo que el ámbito de aplicación se reduce sólo al objeto de su regulación; por otro, el presupuesto para que opere esta responsabilidad ambiental radica en que el hecho dañoso sea constitutivo de infracción administrativa o delito ecológico, y aunque por regla general existirá una coincidencia entre daño e ilícito, es posible imaginar una verdadera "zona gris" en que no sean coincidentes (CIII.13.4.1 y CIV. 4.2).

## 2.4 Conclusión

La conclusión que esta breve comparación permite colegir se resume en que el legislador

<sup>317</sup> La misma solución se encuentra en otras leyes especiales españolas, por ejemplo en la ley de costas 22/1988 (artículo 95.1) y la ley de aguas 29/1985 (artículo 110).

chileno, aunque con matices, se alinea dentro de la noción de daño ambiental adoptada por la ley italiana y las leyes especiales españolas, en las que la responsabilidad por daño ambiental surge por el perjuicio infetido al ambiente en su totalidad o a alguno de sus componentes. Por el contrario en la ley ambiental chilena no se establece una responsabilidad especial sobre los daños que sufran bienes individuales (persona o propiedad) que se pueda derivar por el hecho ambientalmente dañoso. Esta clase de responsabilidad se regirá por las normas comunes. Por el contrario, en la LBGMA se establece una responsabilidad específica por el daño que ha sufrido el medio ambiente<sup>318</sup>.

## 3. Alcance del Sistema de Responsabilidad

El primer aspecto que se destaca de la disposición contenida en el artículo 51 inc. 1° LBGMA es que hace aplicable el sistema de responsabilidad a *"Todo el que"* cause un daño ambiental, expresión que también utiliza el artículo 3 LBGMA. Este punto resulta de trascendencia, porque el sistema de responsabilidad ambiental de la LBGMA, se aplicará a todos los sujetos privados, sean estas personas naturales o jurídicas, y también, en principio, a los sujetos públicos. La expresión *"Todo el que"*, que emplea el artículo 51 inc. 1° es una manifestación del principio general de que todo aquel que causa un daño está obligado a repararlo. No sólo los particulares, sea personas naturales o jurídicas, sino que también el Estado a través de sus órganos pueden, perfectamente, por su actividad, y principalmente por su inactividad, causar un daño ambiental, con lo que su responsabilidad se regularía por las disposiciones de la LBGMA<sup>319</sup>. Sin embargo, el alcance subjetivo de la responsabilidad por el daño ambiental, presenta muchas mayores complejidades cuando el causante del mismo es el Estado o alguno de sus organismos (CIV. 14).

<sup>318</sup> Franco Giampietro, La responsabilità per danno all'ambiente, Editorial Giuffrè, Milán, 1988, p. 205, al comentar la norma del artículo 18.1 de la ley italiana N° 394, señala que: *"Giovà precisare che il danno all'ambiente, di cui all'articolo in esame, non è certo la somma di danni individuali né quello che si riferisce unicamente alla struttura del soggetto titolare dell'interesse leso"*. Puede concluirse siguiendo al citado autor que el daño ambiental no corresponde a la suma de los daños individuales, ni tampoco al interés individual del titular de la acción. Precisamente por la naturaleza del bien jurídico sobre el que recae, dado que no se trata de bienes susceptibles de apropiación exclusiva o individual (por ejemplo la naturaleza, el aire, un paisaje, etc).

<sup>319</sup> Esta fue la opinión sostenida por el autor en: Roles del Consejo de Defensa del Estado en la protección del medio ambiente..., op. cit. pp. 243 y ss.

#### 4. Sistema Subjetivo de Responsabilidad

La naturaleza de la responsabilidad ambiental es de carácter subjetivo, en cuanto se exige que el daño se haya producido por dolo o culpa (artículos 3 y 51 inc. 1° LBGMA). El presupuesto de una responsabilidad subjetiva está en la voluntariedad del hecho imputable, en cuya virtud se ha lesionado un derecho de un sujeto, estando protegido dicho derecho frente a todos o, en el hecho que causa daño violando una norma jurídica que sirve de protección a un individuo<sup>320</sup>. Se trata de un hecho que es atribuible a su autor porque este ha actuado dolosa o negligentemente. Un sistema de responsabilidad ambiental de naturaleza subjetiva está en consonancia con el sistema de responsabilidad extracontractual o *aquiliana* contenido en el Código Civil chileno, que también exige este elemento interno de culpabilidad<sup>321</sup>.

El establecimiento de un sistema de responsabilidad subjetivo cobra relevancia en aquellas situaciones concretas que se planteen, toda vez que el legitimado activo deberá probar que concurre el elemento subjetivo en el causante del daño. No basta con probar el elemento causal respecto del daño, es necesario que este sea imputado a su causante por su dolo o culpa<sup>322</sup>.

##### 4.1 Presunciones de responsabilidad

Frente a la dificultad que conlleva la prueba del elemento subjetivo, la LBGMA recurre a la aplicación de un catálogo de presunciones de responsabilidad. El artículo 52 dispone que: *"Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias."*

Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido".

Existen a lo menos tres aspectos destacables que se coligen de la disposición citada, a saber:

- *Presunción legal.* En consecuencia ella admite prueba en contrario. En todo caso, en virtud de la presunción se libera al demandante de la dificultosa prueba del elemento interno que impone la responsabilidad subjetiva (por dolo o culpa), basta la infracción del ordenamiento ambiental para que se presuma la responsabilidad<sup>323</sup>.
- *Hecho antijurídico.* El presupuesto que debe concurrir para que opere la responsabilidad es que se produzca un hecho antijurídico, lo que en este caso se traduce en una infracción de las normas ambientales, sean estas legales o reglamentarias<sup>324</sup>. No debe pasarse por alto este punto, ya que por lo general el hecho que causa el daño ambiental también estará vulnerando la normativa en la materia. Y aunque no es lógicamente imposible que se produzca un daño sin violación de una norma ambiental<sup>325</sup>, caso en el cual no operará la presunción de responsabilidad y deberá probarse el dolo o culpa del hecho dañoso, lo más probable será que infracción y daño constituyan las dos caras de una misma moneda.

Dentro de este mismo aspecto de la presunción, es posible constatar un error en la técnica legislativa empleada. En efecto, se señala a las normas de calidad ambiental como una de las normas cuya infracción acarrea la presunción de responsabilidad por el daño ambiental. En la práctica, y atendidos el concepto y la forma en que operan las normas primarias y secundarias de calidad ambiental, será imposible que el titular de una actividad o proyecto, o el ejecutor de una acción u omisión que dañe el medio ambiente vulneren la norma de calidad ambiental. Ellas, como se dijo, fijan niveles tolerables de contaminación en un medio ambiente determinado, nivel al que contribuye una multiplicidad de agentes y de emisiones (incluso provenientes de la naturaleza). Por lo que, salvo un caso de laboratorio, será muy poco probable que la actuación de una sola persona vulnere la norma.

<sup>323</sup> Karl Larenz, Derecho Justo, op. cit. pp. 118-119, señala que en aquellos casos en que el daño se produce por un hecho antijurídico opera una especie de negligencia objetiva, que sería el sistema que rige en el Derecho alemán. De esta forma *"quien inflige un daño a otro por medio de un acto antijurídico, aunque sólo de un modo 'objetivamente' negligente, está siempre más cerca de tener que cargar con él, que el afectado que no ha contribuido a ello"*.

<sup>324</sup> Esta inclusión de las normas infralegales como parte del ordenamiento jurídico ambiental, confirma que éste se compone no sólo de normas legales, como lo habría pretendido el legislador en el artículo 1 LBGMA (CI. 4.4.2).

<sup>325</sup> Sin embargo, un hecho que sólo constituya un daño al medio ambiente y no sea además infracción al ordenamiento ambiental, aunque probable desde un punto de vista lógico, sería indicativo de una situación anómala de la regulación dada una laguna legal o unos niveles de protección demasiado bajos. Ello porque precisamente a lo que tiende la normativa ambiental es a evitar el daño del bien jurídico medio ambiente, incluso por la vía anticipada de estimar como infracción el simple riesgo de daño.

<sup>320</sup> Cfr. Karl Larenz, Derecho Justo, Fundamentos de Ética Jurídica, Ed. Civitas, Madrid 1985 (reimpresión 1993) pp. 118-119.

<sup>321</sup> No está de más recordar que el artículo 2314 del Código Civil chileno dispone que: *"El que ha cometido un delito [dolo] o cuasidelito [culpa] que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito"*.

<sup>322</sup> Crítico respecto de este sistema de responsabilidad, Pedro Fernández, Manual de Derecho Ambiental Chileno, op. cit. pp. 113-114.

A ello se agrega que el destinatario de las normas de calidad ambiental no es el ciudadano común, sino el Estado (CIII. 2.4).

- *Relación de causalidad.* La presunción sólo exime de la prueba del elemento subjetivo (dolo o culpa), con lo que será necesario acreditar tanto el daño al medio ambiente, como la relación causal de aquél con la infracción. A ello se refiere el citado inc. 2° del artículo 52 LBGMA el cual dispone que: "*Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido*"<sup>326</sup>.

#### 4.2 Objetivación de la responsabilidad ambiental

Tal como se dijo más arriba, lo más habitual será que el mismo hecho que causa la infracción a una norma que conforma el ordenamiento jurídico ambiental, sea el que cause el daño ambiental. Así entonces será bastante probable que la prueba se traslade desde el elemento subjetivo, hasta la prueba de la vulneración de la norma, que es un aspecto objetivo. Si se atiende a la enumeración de disposiciones cuya vulneración constituye presunción de responsabilidad por el daño ambiental, habrá que concluir que en la práctica se producirá (y de hecho se produce) un vuelco en el sistema de responsabilidad, pasando de la carga de la prueba del elemento subjetivo, a una situación de prueba objetiva de la infracción al ordenamiento jurídico. Ello queda claramente expuesto en la frase final del inc. 1° del artículo 52 LBGMA, el que dispone que se presume la responsabilidad por el daño ambiental, *si existe infracción a las normas sobre protección, preservación, o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias*. Esta última frase lo que en realidad dice es que se presume la responsabilidad cuando se vulnera el Derecho ambiental, toda vez que no existe norma alguna que sea parte del ordenamiento jurídico ambiental, y que no tenga por objeto la protección, preservación o conservación del medio ambiente. Tal vez sólo podrían excluirse las normas sobre organización administrativa que se incluyen en la LBGMA como normas que quedan fuera de dicho grupo, normas que por lo demás no podría un administrado vulnerar.

<sup>326</sup> La citada disposición presenta una deficiencia en la técnica legislativa, toda vez que señala que *sólo habrá lugar a la indemnización...*, como si la forma de reparación del daño ambiental se verificase a través de la vía sustitutiva de la fijación de una suma indemnizatoria. Ello es erróneo, pues, tal como se comprobará (CIV. 7), la forma de reparación que admite el sistema de responsabilidad establecido por la LBGMA es una forma cercana a la reparación *in natura*, es decir, restableciendo el medio ambiente dañado. Por otro lado, si a lo que se refiere la norma es a la indemnización de perjuicios extracontractuales, la referencia era innecesaria atendidas las disposiciones de los artículos 51 inc. 2° y 53 LBGMA.

En consecuencia, la presunción de responsabilidad del autor del daño ambiental, es tan amplia, que en la práctica conduce a una transformación en el sistema de responsabilidad, pasando desde la prueba del dolo o la culpa, a la prueba de la infracción al ordenamiento jurídico. El resultado de todo esto es que la presunción de responsabilidad no operará sólo frente a dos situaciones:

- En los casos en que el autor del daño esté cumpliendo con la normativa y no obstante ocasione un daño ambiental (por ejemplo, la industria que cumple con la normativa sobre emisiones, y no obstante causa daño ambiental y personal)<sup>327</sup>;
- En los casos en que no existe norma ambiental alguna que haya sido vulnerada. Sin embargo, en ambos casos, sin perjuicio de la procedencia de la acción ambiental, esta vez con la prueba del elemento subjetivo, se estará en presencia de verdaderas deficiencias del ordenamiento jurídico ambiental. Esta situación y la responsabilidad que le cabe al Estado serán objeto de examen más adelante (CIV. 14).

#### 5. Daño Ambiental

El daño ambiental es el presupuesto de la responsabilidad ambiental. En efecto, para que surja la responsabilidad es necesaria, en primer término, la concurrencia de un daño ambiental, sólo en virtud de la ocurrencia de éste surgirá la obligación de reparar los perjuicios, que es lo que persigue, como cualquier otra, esta clase de responsabilidad. Positivamente, en el artículo 51 inc. 1° LBGMA, se encuentra plasmado este presupuesto necesario para la concurrencia de responsabilidad ambiental, cuando dice que, concurriendo los demás requisitos, el que *cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley*.

De lo dicho deviene como consecuencia natural que lo que se reputa como daño ambiental, de su concepto, dependerá el nacimiento o no de la responsabilidad respectiva. Esta cuestión resulta ser del todo trascendente, ya que existe una relación directamente proporcional entre la extensión del bien jurídico protegido y las posibilidades de inferirle

<sup>327</sup> Sin embargo, en este caso la LBGMA establece una excepción de responsabilidad ambiental, dejando subsistente sólo la civil indemnizatoria ordinaria, ello se desprende del artículo 55 que dispone: "*Cuando los responsables de fuentes emisoras sujetas a planes de prevención o descontaminación, o a regulaciones especiales para situaciones de emergencia, según corresponda, acreditaren estar dando íntegro y cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en tales planes o regulaciones, sólo habrá la acción indemnizatoria ordinaria deducida por el personalmente afectado, a menos que el daño provenga de causas no contempladas en el respectivo plan, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior*".

un daño<sup>328</sup>. Es decir, la determinación de los bienes ambientales importa correlativamente la de los daños que les pueden ser infligidos<sup>329</sup>. Como ya se ha examinado, el legislador de la LBGMA ha hecho una opción por un concepto expreso y amplio de medio ambiente (CI. 6.1), lo que trae como consecuencia que cualquier daño a los elementos incluidos en la definición de medio ambiente será considerado como daño ambiental<sup>330</sup>.

Dado un concepto amplio de medio ambiente corresponde ahora plantearse el problema de la intensidad que debe tener el perjuicio, para que pueda estimarse como daño ambiental. Frente a esta potencial amplitud del concepto de daño ambiental y consecuente sobre extensión de las posibilidades de impetración de la acción de responsabilidad por el daño ambiental, el artículo 2 letra e) de la LBGMA definió el daño ambiental como: *"Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes"*.

## 5.1 Características

A partir de la definición legal, es posible atribuir tres características al concepto de daño ambiental, a saber:

### 5.1.1 Sólo es daño ambiental el inferido al medio ambiente

Tal vez el elemento más distintivo del daño ambiental sea, precisamente, éste, que sea un daño *ambiental*. En el Derecho común se ha definido daño como *"el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio"*<sup>331</sup>. En el mismo sentido el artículo

<sup>328</sup> Aquí se debe hacer una pequeña aclaración. De lo que se está hablando es de responsabilidad por daño ambiental, por lo que el concepto sobre el que se estructura toda esta argumentación es el de *medio ambiente*, que la propia LBGMA señala en el artículo 2 letra II). Concepto mucho más amplio que el formulado a partir del artículo 19 N° 8 CPR que viene acotado por las nociones de entorno adyacente y previsibilidad que se han tratado en CII. 2.2.3. En definitiva, la vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación será, en la práctica, una especie del género daño al medio ambiente.

<sup>329</sup> Alexandre Kiss y Dinah Shelton, *Manual of European Environmental Law*, Cambridge University Press, 2ª edición, Cambridge 1997, p. 3: *"Defining environment is also crucial to determining the application of legal rules and the extent of liability when harms occur"*.

<sup>330</sup> Ello ha sido entendido así en la práctica. Por ejemplo, los daños al patrimonio cultural han sido objeto de demandas ambientales interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado. Estos casos pueden ser consultados en [www.cde.cl](http://www.cde.cl).

<sup>331</sup> Concepto de Karl Larenz, citado por José Luis Lacruz Verdejo y otros autores, *Derecho de Obligaciones, Volumen Segundo Contratos y Cuasicontratos, Delito y Cuasidelito*, Ed. José María Bosch, Barcelona, 1995, p. 477.

2314 del Código Civil chileno señala que *el que ha cometido delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización*, y el artículo 2329 del mismo código dispone que *"Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta"* (es decir, el principio de reparación plena e integral). Es decir, para el Derecho civil el concepto de daño está referido al perjuicio inferido en la persona (sea éste un daño corporal o un daño moral) o a la propiedad o patrimonio de un sujeto de derecho, sea persona natural o jurídica<sup>332</sup>. En cambio, de acuerdo al concepto que señala el legislador de la LBGMA, el daño ambiental consiste en el detrimento que sufre el medio ambiente en su totalidad o en alguno de sus elementos. De este razonamiento se deducen las siguientes consecuencias:

- *El medio ambiente es un bien de titularidad colectiva*. Si se considera que el medio ambiente, en cuanto tal, constituye un bien que no pertenece a ninguna persona en particular, que es de titularidad colectiva o *erga omnes*<sup>333</sup>, resulta lógico esperar que la noción de daño ambiental no esté referida a bienes individuales de un sujeto de derecho (como la persona, la propiedad o el patrimonio), sino a bienes exclusivamente ambientales<sup>334</sup>. Esta cuestión no resulta baladí, sobre todo cuando se tiene presente que el daño ambiental es el presupuesto de esta clase de responsabilidad, con lo que el concepto que de él se tenga será determinante para el establecimiento de la legitimación activa en la acción a que dé lugar; como también respecto de las medidas tendientes a reparar las consecuencias del perjuicio. Titularidad de la acción y forma de reparación serán las dos principales interrogantes que debe responder el legislador cuando establece una responsabilidad por daño ambiental, que parte de la base de un concepto de daño estrictamente ambiental como el del Derecho ambiental chileno.

<sup>332</sup> Arturo Alessandri Rodríguez, *La responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno*, Imprenta Universitaria, Santiago, 1943, p. 210 señala que: *"Daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc."*

<sup>333</sup> Franco Giampietro, *La responsabilidad per danno all'ambiente*, op. cit., p. 153, con relación a la naturaleza del bien jurídico medio ambiente concluye como tendencia general que: *"l'orientamento della dottrina si consolida nel senso di abbandonare ogni ulteriori tentativo di definizione dell'ambiente come bene giuridico, suscettibile di difesa individuale. Suggestisce di apprestarne la tutela come interesse collettivo all'uso delle risorse, strumento di controllo sociale e sull'attività d'impresa e sulle potestà di governo dell'ambiente, riservate alle pubbliche amministrazioni"*.

<sup>334</sup> Evidentemente existen bienes ambientales que son susceptibles de apropiación privada, sin embargo ello no les hace perder su carácter de bien ambiental, dada la función social/ambiental que la propiedad privada debe cumplir (CII. 4.3.1) y en último término, dada la contribución que éstos tienen en el sistema ambiental; en el ecosistema.



- *El daño es inferido al medio ambiente o a alguno de sus elementos.* El concepto de daño ambiental que entrega el legislador chileno discurre sobre la base de un perjuicio inferido al medio ambiente o a uno o más de sus elementos. ¿Tiene alguna relevancia esta distinción que efectúa la norma? Es meridianamente claro que existe una diferencia entre los elementos que conforman el medio ambiente y el medio ambiente como sistema global. Es difícil concebir un daño a algún elemento ambiental que en definitiva no vaya a repercutir en la totalidad del ambiente, dado el carácter sistémico y profundamente interrelacionado que el entorno comporta. Sin embargo, es al momento de la reparación del daño donde la distinción cobra mayor importancia. Por ejemplo, la tala ilegal de un bosque. Existe un elemento ambiental dañado, el bosque, con una repercusión que incluso puede ser mediata o inmediata en el sistema total. La reparación de ese daño ambiental no debería agotarse en la sola reposición de las especies arbóreas taladas, también debería repararse el daño al sistema ecológico, es decir, al medio ambiente considerado en su conjunto, por ejemplo, repoblando la fauna que existía en el lugar o restableciendo los cursos de agua existentes. Se volverá sobre este tema a propósito de la reparación del daño ambiental (CIV. 7).

### 5.1.2 El daño ambiental puede presentarse en cualquier forma

De acuerdo con el concepto legal de daño ambiental, este se entenderá acaecido independientemente de la forma en que se presente. Ello se deduce del artículo 2 letra e) LBGMA cuando dice que daño ambiental es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo. Son todas expresiones sinónimas de daño o perjuicio. Lo fundamental es destacar que no importa la forma en que se presente el daño para que surja la responsabilidad. Es decir, no importa que se trate de la pérdida de una especie o la disminución de un recurso natural o el detrimento de un sitio arqueológico, toda manifestación dañosa para el medio ambiente o para alguno de sus elementos queda comprendida en la definición de daño ambiental.

### 5.1.3 El daño ambiental debe ser significativo

Si respecto de la forma en que se puede presentar el daño el legislador utilizó un criterio amplio, este criterio varió cuando se refirió a la intensidad o envergadura del daño. Sólo es daño ambiental aquél que es significativo. Como se había señalado más arriba, existe una relación directamente proporcional entre la extensión del concepto de medio ambiente y las posibilidades de inferirle daño. La limitación de la responsabilidad ambiental no fue estructurada sobre la base de limitar lo que debe entenderse por medio ambiente, que según el artículo 2 letra II) de la LBGMA es un concepto muy amplio, sino por la vía de

considerar que jurídicamente existe responsabilidad ambiental sólo cuando el daño sea significativo, o lo que es igual, que sea un daño de importancia o considerable. Resultará fundamental entonces, para el éxito de una acción de responsabilidad por el daño ambiental, fijar el sentido y alcance de lo que se debe entender por daño significativo.

*Prima facie* hay que manifestar una conformidad con el límite empleado por el legislador, toda vez que cualquier actividad, por inocua que parezca, puede entrañar un daño al ambiente, lo que importaría la consecuente responsabilidad. Si se admitiera que cualquier daño por leve que sea engendra responsabilidad ambiental se llegaría a la inoperatividad de la institución, toda vez que toda actividad humana importa un daño o menoscabo al medio ambiente. Es por ello que, hoy en día, no es posible hablar de contaminación cero, sino de niveles aceptables de contaminación y consecuentemente niveles aceptables de daño al medio ambiente<sup>335</sup>. Decir que sólo genera responsabilidad el daño significativo importa aceptar que existe una "zona gris" de actividades dañosas que no llegan a ser de tal trascendencia como para generar responsabilidad<sup>336</sup>.

En definitiva, el umbral de significancia o importancia del daño tendrá que ser fijado en cada caso en particular por el juez. Así por ejemplo en el asunto Albornoz Vera y otros con Sociedad Maderera de Aysén S.A., la Corte de Apelaciones de Coyhaique en una ya antigua sentencia de 28 de diciembre de 1992 dice que: "*no cabe suponer que la mera corta de cierta cantidad de árboles de un bosque contamine (dañe) -por sí solo- un medio ambiente determinado*". No se señala en este caso qué cantidad de árboles se cortaron, ya que se trataba de un recurso de protección, destinado sólo a restablecer la vigencia del derecho constitucional vulnerado. Sin embargo, la conclusión del Tribunal aparece como demasiado laxa, si se considera que de lo que se trata es de proteger el medio ambiente. Una interpretación pro ambiente, a partir del concepto de daño significativo importará que cada vez que se plantee la disyuntiva respecto de la entidad del perjuicio, el juez debe fundamentar por qué se estima que ese daño no tiene una envergadura o trascendencia tal, como para quedar dentro del concepto de daño ambiental.

### 5.1.4 Daño significativo en el Derecho comparado

El requisito de significancia, trascendencia o importancia del daño no constituye novedad en el Derecho ambiental comparado. Así, en el caso de la ley federal alemana

<sup>335</sup> Tal es el sentido de las normas primarias y secundarias de calidad ambiental, definidas en las letras n) y ñ) del artículo 2 de la LBGMA (CII. 2.4 y CIII. 2).

<sup>336</sup> El problema de aceptar esta zona gris lo plantean las situaciones de daño acumulativo o de daños con causas difusas, en las cuales un agente individual produce un daño no significativo, pero que adicionado al de los demás agentes sobrepasa ese umbral de tolerancia variable fijado por la Ley.



de protección contra las inmisiones (*Bundesimmissionsschutzgesetz*), el parágrafo § 3(1) establece lo que debe ser entendido como efectos ambientales negativos (*schädliche Umwelteinwirkungen*), entendiéndose que presentan tal carácter, aquellas inmisiones que por su forma, dimensión y duración son adecuadas para producir peligros o desventajas considerables o molestias considerables para la generalidad de las personas o para la comunidad (vecindad)<sup>337</sup>. A partir de dicha disposición, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado los criterios que deben ser tenidos en cuenta para que el peligro, desventaja o molestia sea considerable (*erheblich/Erheblichkeit*), expresión que puede ser estimada como un equivalente al carácter *significativo* que debe presentar el daño ambiental en el Derecho chileno. Entre los criterios que se señalan se cuentan:

- *Daños a la salud.* El primer criterio dice relación con la presencia o no de personas. Si el daño se produce respecto de la salud de las personas, el criterio de la considerabilidad (*Erheblichkeit*) opera como un sinónimo, es decir, cada vez que por el daño ambiental se afecta a la salud de las personas (con mayor razón a la vida) debe entenderse que es considerable, *tales daños son siempre considerables*<sup>338</sup>. Incluso, se estima que es considerable el daño cuando: a) el daño ambiental afecta a grupos de la población que son más sensibles a algún contaminante (por ejemplo niños, ancianos o personas con problemas respiratorios frente a la contaminación por MP10) o; b) las manifestaciones del daño a la salud sólo se producen en el largo plazo (por ejemplo contaminación por plomo en el suelo, que al cabo de 10 años produce cáncer a los habitantes del lugar). La jurisprudencia alemana ha señalado que se entiende que se ha producido un daño a la salud cuando se produce una variación en la funcionalidad o morfología del organismo, que sobrepasa significativamente el espectro natural de variabilidad de éste. Sin embargo, es necesario que el daño sea fisiológico, ya que si se trata de molestias o efectos psicológicos, será necesario probar que el daño ambiental es *considerable*<sup>339</sup>.
- *Forma, dimensión y duración del daño.* Por forma del daño se alude a la manera en que el efecto nocivo de la contaminación se manifiesta, por ejemplo si se trata de un problema de contaminación atmosférica, el grado de toxicidad, la volatilidad y dispersión, los efectos sinérgicos, etc. La dimensión se refiere a la intensidad del daño, por ejemplo la cantidad de concentración de contaminante. Por duración, evidentemente, el espacio de tiempo que comprende el daño. Sin embargo, este

no tiene que ser constante, ya que daños intermitentes, ocasionales o eventuales, también pueden ser considerables o significativos. Asimismo, algunas inmisiones, dependiendo del momento en que se produzcan pueden ser estimadas como considerables o significativas, por ejemplo el ruido de una máquina el día domingo o por la noche.

- *Apreciación respecto de un ciudadano promedio.* El grado de significancia o de considerabilidad del daño, cuando se trata de daños ambientales que se producen sobre cosas —ya se vio que en el caso de daños a la salud éstos son siempre considerables— debe ser apreciado respecto de un ciudadano juicioso promedio. Un daño ambiental es considerable o significativo cuando este no es razonablemente tolerable por un ciudadano promedio.
- *Naturaleza del lugar.* El lugar en que el daño se produce resultará determinante para la razonabilidad o significancia del daño<sup>340</sup>. En consecuencia, el mismo daño que en un predio privado podría ser considerado como tolerable o no significativo, en un área silvestre protegida (parque, reserva o monumento nacional) puede ser considerable o significativo. Asimismo, dependiendo de la ordenación del territorio, distinto será si el daño se ha producido en un área residencial a una industrial, etc.
- *Consentimiento y tolerancia.* En el Derecho alemán se estima como una posibilidad lícita que la persona concernida por la inmisión dañosa, o el propietario de la cosa que sufre el daño, renuncien al amparo que les brinda la ley federal de protección contra las inmisiones. En nuestro ordenamiento jurídico, como se verá (CIV. 8.4 y 9) es posible que, producto de la aplicación de las disposiciones procesales civiles al procedimiento de responsabilidad por el daño ambiental pueda llegarse a la misma solución.
- *Desventajas de la descontaminación.* Para determinar el grado de significancia o razonabilidad del daño, no tienen relación alguna las desventajas de otro tipo, principalmente económico, que las medidas para la reparación, descontaminación y evitación del daño ambiental puedan significar para el propio contaminador, o incluso para la comunidad (por ejemplo, si la actividad dañosa prestaba un servicio público). De lo contrario, se estima, que el concepto de efecto ambiental negativo (*schädliche Umwelteinwirkung*) pierde su sentido y sus contornos. Aunque se reconoce que el efecto práctico de este criterio es apreciable sólo en los casos en que el Derecho ambiental ha previsto una defensa estricta contra los peligros

<sup>337</sup> § 3 (1) "Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Immissionen, die nach Art, Ausmass, oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen".

<sup>338</sup> Hans Jarass, Bundesimmissionsschutzgesetz, op. cit. pp. 95-96.

<sup>339</sup> En consecuencia, no es que se excluya la posibilidad de que el daño ambiental pueda producir efectos psicológicos o en el bienestar espiritual de las personas, lo que ocurre, es que a diferencia de los daños a la salud, respecto de éstos debe probarse su significancia o considerabilidad.

<sup>340</sup> La significancia y la irrazonabilidad del daño son las dos caras de la misma moneda, debiendo ser considerados, para estos efectos, como conceptos sinónimos.

que la contaminación y los daños ambientales puedan comportar<sup>341</sup> (por ejemplo en materia de seguridad nuclear, por la utilización de productos que contengan elementos cancerígenos, etc.).

## 6. Relación de Causalidad

Tanto el artículo 3 como el artículo 51 inc. 1° de la LBGMA se refieren a este requisito de la responsabilidad ambiental en idénticos términos, en ambos se exige que se *cause* daño. Es un requisito general a todo sistema de responsabilidad y es lógico que entre este hecho doloso o culposo (o la infracción al ordenamiento jurídico ambiental) y el daño ambiental "significativo", exista una *relación de causalidad*.

Atendida la extensión de este trabajo, en este punto sólo se dejarán enunciadas dos cuestiones:

- *La relación de causalidad no se presume.* Con lo que en aquellos casos en que se presume la responsabilidad del sujeto agente de la acción u omisión que se estima provocó el daño, igualmente habrá que probar la relación de causa a efecto entre la conducta (activa u omisiva) y el daño producido. En efecto, se debe probar que el hecho doloso o culposo es la causa directa y necesaria del daño ambiental, que de no mediar aquel hecho el daño no se habría producido.
- *Pluralidad de causas.* Este elemento resulta ser de suyo complejo, ya que en un mismo hecho dañoso es probable que concurren un sinnúmero de causas, es el caso de la pluralidad de causas. Por ejemplo, si se considera que los niveles de MP10 en Santiago de Chile están ocasionando un daño significativo al ambiente atmosférico, podría rápidamente concluirse que este se debe al sobredimensionado parque automotor existente. Pero si imaginariamente se eliminara este hecho causal, será muy probable que la situación se mantenga o mejore levemente, en definitiva que el daño ambiental persista. Si imaginariamente se quitasen las emisiones de las fuentes fijas, también será probable que el daño persista. Entonces frente a este panorama, que desgraciadamente no es hipotético, será posible preguntarse ¿cuál es la causa del daño ambiental-atmosférico? En resumen, el problema de la pluralidad de las causas ambientales constituye uno de los temas más álgidos en materia de responsabilidad por el daño ambiental<sup>342</sup>.

<sup>341</sup> Hans Jarass, Bundesimmissionsschutzgesetz, op. cit. p. 100.

<sup>342</sup> Michael Prieur, Droit de l'environnement, Ed. Dalloz, Paris 1984, pp.1038 y 1039, refiriéndose tanto a las características del daño ambiental como a la complejidad de la relación de causalidad señala que: "los efectos del daño ecológico se pueden manifestar más allá de la vecindad (efectos aguas abajo de una contaminación de las aguas, lluvias ácidas debido al transporte a través de la atmósfera y a la larga distancia, de anhídrido sulfúrico);

## 7. Reparación del Daño Ambiental

El principio general de responsabilidad impone que todo daño deba ser reparado. Ya se ha señalado cómo se produce una primera limitación cuando el daño ambiental que genera responsabilidad sólo es aquél que sea de carácter significativo, quedando fuera del sistema de responsabilidad por daño ambiental todos aquellos daños que no superen este umbral. La segunda limitación se producirá a propósito de la reparación del daño.

Si se recurre a la norma del artículo 3 LBGMA se recordará que el que cause daño ambiental "estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley". Más adelante en la ley, la norma del artículo 51 inc. 1° dispone que el causante de daño al medio ambiente "responderá del mismo en conformidad a la presente ley". Finalmente, el artículo 53 establece que "Producido el daño ambiental, se concede acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado".

Aquí se plantea una cuestión clave para entender la forma en que operará la responsabilidad por daño ambiental. Lo que se desprende de los preceptos transcritos es que por un daño ambiental se pueden generar dos clases de responsabilidad reparatoria:

- *Responsabilidad para la reparación de los daños al medio ambiente o simplemente responsabilidad ambiental.* Esta clase de responsabilidad se aprecia claramente en el artículo 53, en cuanto la acción que en él se contempla es para la "reparación" del medio ambiente dañado, oponiéndola a la reparación consistente en una indemnización, de naturaleza estrictamente civil extracontractual, que puede ejercer el directamente afectado.
- *Responsabilidad ordinaria o meramente civil extracontractual.* Se trata de la responsabilidad regida por las normas del Código Civil, la cual atiende a los perjuicios individuales, esto es, en la persona o propiedad, que se ocasionaron por el mismo hecho causal del daño ambiental.

Esta distinción resulta del todo lógica ya que un mismo hecho puede ser el causante de un daño ambiental, y también de un daño individual, es decir, en la persona o patrimonio de un sujeto de derecho. Por ejemplo, el vertido tóxico que se realiza en un río, constituye un daño ambiental, genera por tanto dicha clase de responsabilidad, pero además daña el patrimonio de los propietarios de una piscicultura que utilizaban sus aguas, es decir,

son daños colectivos por sus causas (pluralidad de autores, desarrollo industrial, concentración urbana) y sus efectos (costos sociales); son daños difusos en su manifestación (aire, radiactividad, contaminación de aguas) y en el establecimiento de la relación de causalidad; repercuten en la medida en que ellos implican primero un atentado a un elemento natural y por rebotes a los derechos de los individuos".